

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. _____

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-002-2016-00068-01
DEMANDANTE:	DIEGO MAURICIO QUINTERO CIFUENTES Y OTROS notificacion.procesal@gmail.com
DEMANDADO:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC notificaciones@inpec.gov.co
ASUNTO	REVOCA AUTO QUE RECHAZÓ INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PERJUICIOS Y DECLARÓ LA CADUCIDAD.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso apelación propuesto por la parte demandante contra la decisión tomada en audiencia del 23 de septiembre de 2019, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, de rechazar el incidente de liquidación de perjuicios y declarar la caducidad del derecho surgido en ocasión a la sentenciar nro. 124 del 7 de mayo de 2019, proferida por ese despacho judicial.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la parte demandante solicitó se declare administrativa y patrimonialmente responsable al INPEC, por los daños y perjuicios causados con motivo de las graves lesiones que sufrió el señor DIEGO MAURICIO QUINTERO CIFUENTES, el 8 de enero de 2015, mientras se encontraba cumpliendo una condena en el complejo penitenciario “ERON” de Jamundí¹.

Mediante sentencia nro. 124 del 7 de mayo de 2019², proferida en audiencia, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali resolvió:

“(…). 2. – CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – a pagar en abstracto (art. 193, Ley 1437) a título de perjuicios morales y en el porcentaje correspondiente a DIEGO MAURICIO QUINTERO CIFUENTES (directo) y en representación de su hija menor NASLY JULIETH QUINTERO SALDARRIAGA (indirecta) y a – MARLLIN QUINTERO CIFUENTES (indirecta) – resultante de aplicar el documento final “Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales” de perjuicios en lesión, aprobado mediante Acta del 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera. Transcurridos los 60 días hábiles sin promoverse el incidente terminará la obligación. Los pagos se harán en los términos y condiciones indicados en esta sentencia. Igualmente se condenará por **daño a la salud** en favor del señor DIEGO MAURICIO QUINTERO en el

¹ Folios 14-24.

² Folios 111-114.



porcentaje correspondiente del documento final Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales” de perjuicios en lesión”.

El 30 de julio de 2019, el apoderado judicial de la parte demandante presentó incidente de liquidación de perjuicios³ y, a la vez, solicitó⁴ ampliar el término para iniciar un nuevo incidente, en virtud de la sentencia nro. 124 del 7 de mayo de 2019, bajo el siguiente argumento:

“1. Con el fin de determinar el cálculo monetario de los perjuicios morales y daño a la salud más costas, se debe tener en cuenta la calificación de pérdida de capacidad laboral del señor DIEGO MAURICIO QUINTERO CIFUENTES, que debe realizar la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, según lo ordenado en la sentencia en mención por el Doctor CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID.

2. A la fecha el señor QUINTERO no cuenta con los recursos suficientes para costear el valor correspondiente a la valoración por pérdida de capacidad laboral, y necesita de más tiempo para reunir el valor total”.

Mediante auto interlocutorio nro. 2487 del 2 de septiembre de 2019⁵, el Juzgado admitió el incidente de liquidación de perjuicios, ordenó correr traslado del mismo al INPEC y fijó como fecha para la realización de la audiencia el 23 de septiembre de 2019.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

En audiencia celebrada el 23 de septiembre de 2019, mediante auto interlocutorio nro. 2731, el Juzgado resolvió rechazar el incidente y declarar la caducidad del derecho de los demandantes surgido con ocasión de la sentencia nro. 124 del 7 de mayo de 2019 proferida por ese Despacho.

Como sustento de su decisión, adujo que la parte demandante no cumplió con los parámetros establecidos en la sentencia del 7 de mayo de 2019 para la presentación de incidente, al omitir presentar el valor de la liquidación por no contar con el examen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez debido a dificultades económicas. Resaltó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez le fijó al demandante el día 7 de mayo de 2019 como fecha para la realización del respectivo examen, pero éste no compareció, por lo que debió agendarse una nueva fecha.

Concluyó que, no habiendo presentado el demandante liquidación alguna, había lugar a aplicar lo dispuesto en el artículo 193 del CPACA⁶

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

³ Folios 1-4 del cuaderno nro. 2.

⁴ Folio 5 del cuaderno nro. 2.

⁵ Folio 7 del cuaderno nro 2.

⁶ “Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.” – Subrayas y negritas del Despacho.



La apoderada judicial de la parte demandante alegó que el demandante no contaba con los recursos para la realización del examen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez⁷.

CONSIDERACIONES:

4.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer si en el *sub examine*, posterior a la admisión del incidente de liquidación de perjuicios, había lugar a declarar la caducidad del derecho reconocido mediante la sentencia que ordenó una condena en abstracto, por haberse presentado el incidente sin la respectiva liquidación y el sustento probatorio.

4.3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El artículo 193 del CPACA preceptúa lo siguiente:

“Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

Por su parte, el artículo 210 *ibídem*, dispone:

“El incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad.

La solicitud y trámite se someterá a las siguientes reglas:

1. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer.
2. Del incidente promovido por una parte en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra para que se pronuncie y **en seguida se decretarán y practicarán las pruebas en caso de ser necesarias.**
3. Los incidentes no suspenderán el curso del proceso y serán resueltos en la audiencia siguiente a su formulación, salvo que propuestos en audiencia sea posible su decisión en la misma.

⁷ CD obrante a folio 18 del cuaderno nro. 2.



4. Cuando los incidentes sean de aquellos que se promueven después de proferida la sentencia o de la providencia con la cual se termine el proceso, el juez lo resolverá previa la práctica de las pruebas que estime necesarias. En estos casos podrá citar a una audiencia especial para resolverlo, si lo considera procedente.

Cuando la cuestión accesoria planteada no deba tramitarse como incidente, el juez la decidirá de plano, a menos que el Código de Procedimiento Civil establezca un procedimiento especial o que hubiere hechos que probar, caso en el cual a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos, sin perjuicio de que el juez pueda ordenar la práctica de pruebas”. (Negrita y subrayas fuera del texto).

Adicionalmente, el artículo 130 del Código General del Proceso señala que “El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código y los que se promuevan fuera de término o en contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales”.

De las normas precedentemente citadas se resalta que la solicitud para dar apertura al trámite incidental de liquidación de perjuicios debe ser presentada dentro del término de 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia y ésta debe cumplir con ciertos requisitos (lo que se pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretende hacer valer). También, se destaca que el juez cuenta con la potestad de decretar las pruebas que considere necesarias previamente a resolver al incidente.

También, es menester acotar que las aludidas normas deben ser armonizadas con el principio constitucional de acceso a la administración de justicia. Así lo señaló el Consejo de Estado en un reciente pronunciamiento, del cual vale la pena citar el siguiente extracto:

“(…) Es cierto que las normas procesales antes mencionadas indican que la solicitud para dar apertura a un trámite incidental debe expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretende hacer valer. Sin embargo, dichas reglas de carácter procesal deben interpretarse en armonía con el principio constitucional de acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, el artículo 103 del CPACA⁸ establece que los procesos que se adelanten ante la jurisdicción tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política.

⁸ Artículo 103. *Objeto y principios*. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga. Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.



En este sentido, cabe resaltar que la prevalencia del derecho sustancial sobre el formalismo, se traduce y concreta en garantizar el **real y efectivo acceso a la administración de justicia**. Ese imperativo constitucional (artículo 228 de la Constitución Política), como garantía para la protección de los derechos fundamentales, está contenido en el artículo 14, numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que consagra el derecho de todas las personas a ser oídos ante los tribunales y cortes de justicia en condiciones de igualdad y con las debidas garantías mínimas. En desarrollo de dicho principio, el Comité de Derechos Humanos ha estimado que el derecho de **acceso a la administración de justicia** está relacionado con los **derechos a la tutela judicial, al recurso efectivo y a la igualdad**⁹.
(...)

En suma, como lo ha precisado la Corte Constitucional, para la satisfacción de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de la tutela judicial efectiva *“no basta con que en los procesos se emitan decisiones definitivas en las cuales se resuelvan controversias y se ordene la protección a los derechos de las partes”*¹⁰, ya que es preciso que existan mecanismos eficaces para hacer eficaces las decisiones o sentencias, de modo que se protejan efectivamente los derechos sustanciales.

En este orden de ideas, es claro para esta Sala que aun cuando el CPACA establezca reglas para el trámite del incidente de liquidación de perjuicios, no puede llegarse al extremo de hacer nugatorio el acceso a la administración de justicia, por razones en exceso formales que no se acompañan con el deber que tiene el juez en un estado social de derecho de garantizar la efectividad de los derechos con prevalencia del derecho sustancial. Más aún si se tiene en cuenta que la finalidad del referido incidente, es *“la materialización de la condena in genere decretada”*¹¹.
(Añadimos negrillas).

4.4. CASO CONCRETO:

En el presente caso, a través de sentencia nro. 124 del 7 de mayo de 2019¹², proferida en audiencia, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali resolvió:

“(...). 2. – CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – a pagar en abstracto (art. 193, Ley 1437) a título de perjuicios morales y en el porcentaje correspondiente a DIEGO MAURICIO QUINTERO CIFUENTES (directo) y en representación de su hija menor NASLY JULIETH QUINTERO SALDARRIAGA (indirecta) y a – MARLLIN QUINTERO CIFUENTES (indirecta) – resultante de aplicar el documento final “Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales” de perjuicios en lesión, aprobado mediante Acta del 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera. Transcurridos los 60 días hábiles sin promoverse el

⁹ Ver al respecto: Comité de Derechos Humanos, Anthony Currie contra Jamaica, Comunicación N° 377/1989, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/377/1989 (1994); Desmond Taylor contra Jamaica, Comunicación No. 705/1996, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/705/1996 (1998); Rawle Kennedy contra Trinidad y Tobago, Comunicación N° 845/1999, U.N. Doc. CCPR/C/67/D/845/1999 (1999); Anni Äärelä y Jouni Näkkäläjäarvi contra Finlandia, Comunicación N° 779/1997, U.N. Doc. CCPR/C/73/D/779/1997 (2001).

¹⁰ Corte Constitucional, sentencia T-283 de 2018, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

¹¹ Consejo de Estado – Sección Cuarta – Sentencia del 30 de enero de 2020 – Consejera Ponente Stella Jeanette Carvajal – Radicación nro. 11001-03-15-000-2019-04777 (AC).

¹² Folios 111-114.



incidente terminará la obligación. Los pagos se harán en los términos y condiciones indicados en esta sentencia. Igualmente se condenará por **daño a la salud** en favor del señor DIEGO MAURICIO QUINTERO en el porcentaje correspondiente del documento final Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales” de perjuicios en lesión”.

El 30 de julio de 2019, el apoderado judicial de la parte demandante presentó incidente de liquidación de perjuicios¹³ y, a la vez, solicitó¹⁴ ampliar el término para iniciar un nuevo incidente, en virtud de la sentencia nro. 124 del 7 de mayo de 2019, bajo el siguiente argumento:

“1. Con el fin de determinar el cálculo monetario de los perjuicios morales y daño a la salud más costas, se debe tener en cuenta la calificación de pérdida de capacidad laboral del señor DIEGO MAURICIO QUINTERO CIFUENTES, que debe realizar la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, según lo ordenado en la sentencia en mención por el Doctor CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID.

2. A la fecha el señor QUINTERO no cuenta con los recursos suficientes para costear el valor correspondiente a la valoración por pérdida de capacidad laboral, y necesita de más tiempo para reunir el valor total”.

Mediante auto interlocutorio nro. 2487 del 2 de septiembre de 2019¹⁵, el Juzgado admitió el incidente de liquidación de perjuicios, ordenó correr traslado del mismo al INPEC y fijó como fecha para la realización de la audiencia el 23 de septiembre de 2019.

No obstante, en audiencia celebrada el 23 de septiembre de 2019, el Juzgado rechazó el incidente porque según dicha autoridad judicial, había operado la caducidad, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 193 del CPACA. Explicó que el término de los 60 días a los que se refiere la aludida norma para presentar la solicitud de apertura del incidente de liquidación de perjuicios, corrieron desde el 22 de mayo de 2019 hasta el 20 de agosto de 2019 y que la parte actora presentó el escrito el 30 de julio de 2019, sin haber allegado posteriormente liquidación alguna con la inclusión de la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Diego Mauricio Quintero Cifuentes.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, este juzgador aclara que el incidente de liquidación de perjuicios fue presentado dentro del término de 60 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, el 30 de julio de 2019. Distinto es que éste no fue presentado con el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley, al no contener la respectiva liquidación y el sustento probatorio.

Pese a la existencia de la falencia anterior, el juez procedió a dar trámite al incidente, sin darle la oportunidad al demandante de subsanar el yerro existente y sin pronunciarse frente a su manifestación, referente a la dificultad de aportar la prueba en ese momento procesal. Adicionalmente, el juez contaba con la facultad de decretar las pruebas necesarias para la tasación de la condena en abstracto, pero se abstuvo de hacerlo y únicamente se limitó a fijar fecha para la celebración de la respectiva audiencia a sabiendas de que no existían los elementos probatorios para llevar a cabo la liquidación; diligencia en la que finalmente rechazó el incidente por

¹³ Folios 1-4 del cuaderno nro. 2.

¹⁴ Folio 5 del cuaderno nro. 2.

¹⁵ Folio 7 del cuaderno nro 2.



caducidad.

En este punto, es pertinente reiterar que, conforme a lo expuesto en el acápite anterior, no puede el juez llegar al extremo de hacer nugatorio el acceso a la administración de justicia bajo el argumento de que las normas que regulan el incidente de liquidación de perjuicios señalan tales exigencias. Esos excesos formales van en contravía de la finalidad de garantizar la efectividad del derecho reconocido a través de la sentencia condenatoria.

En ese orden de ideas, se concluye que resulta contraria al principio de acceso a la administración de justicia la actuación del juez al incurrir con ésta en un exceso ritual manifiesto¹⁶, por cuanto procedió al rechazo de la solicitud de trámite incidental en audiencia, cuando previamente había dispuesto su admisión ignorando la solicitud del demandante, de que le fuera concedido un plazo para aportar la prueba que sustentaría la liquidación de perjuicios, y omitiendo su deber legal de decretar las pruebas necesarias para establecer el valor de la condena.

Por las razones anteriormente expuestas, habrá de revocarse el auto objeto de apelación, para que, en su lugar, el juez de primera instancia le conceda al demandante un término prudencial en aras de la práctica de la prueba pericial requerida con el propósito de tasar el valor de la condena en abstracto impuesta a través de la sentencia nro. 1254 del 7 de mayo de 2019.

En consecuencia, se

R E S U E L V E:

PRIMERO: **REVOCAR**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, el auto nro. 2731 del 23 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al juzgado de origen, con el fin de que le conceda a la parte demandante un término prudencial para la práctica de la prueba pericial requerida con el propósito de tasar el valor de la condena en abstracto impuesta a través de la sentencia nro. 1254 del 7 de mayo de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

¹⁶ El exceso ritual manifiesto se configura “cuando el juez actúa con excesivo apego a las previsiones legales que termina obstaculizando la materialización de los derechos sustanciales, desconociendo el carácter vinculante de la Constitución, la primacía de los derechos inalienables de la persona y la prevalencia de lo sustancial sobre las formas”. Este defecto debe declararse, “cuando la autoridad judicial, so pretexto de cumplir con las ritualidades propias del trámite, entorpece la realización de las garantías sustanciales, la verdad real y la justicia material al emitir decisiones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico”. (Corte Constitucional, SU-268 de 2019).

Radicación
Medio de control
Accionante
Accionado

: 2016-00068-01
: REPARACIÓN DIRECTA
: DIEGO MAURICIO QUINTERO CIFUENTES Y OTROS
: INPEC

8



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado

ACH